PARTICIPANTE: INATIC

¿Considera que las restricciones identificadas son las más relevante?

(máximo 1000 palabras):

De manera general las restricciones identificadas resultan las más destacables. Sin embargo, dentro de algunas de las categorías de obstáculos identificados, si bien se han indicado situaciones y ejemplos concretos, se podrían haber establecido subcategorías, asociándole ya a cada una de estas subcategorías los ejemplos y casos prácticos descritos. Todo ello debido a que las tipologías de impedimentos identificados son bastante generales y los casos y ejemplos a los que se hace referencia son específicos a situaciones concretas.

De esta manera, se señalan para dos de las tipologías de obstáculos identificados varias subcategorías que se les podrían asociar, las cuales se describen brevemente y se les incorporan situaciones en las que se han producido.

iii.) Prohibiciones absolutas relativas al lugar de instalación de las infraestructuras

iii.a) Prohibición a efectuar despliegues por fachadas

iii.b) Prohibición a efectuar tendidos aéreos

iii.c) Prohibición a efectuar despliegues por fachada o aéreos en edificaciones con algún grado de protección

Se ha dado el caso de administraciones municipales que han denegado los despliegues por fachadas o aéreos a través de edificaciones con algún grado de protección, pero no catalogadas Bien de Interés Cultural por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma. Esto contraviene lo establecido en el artículo 49.8 de la Ley General de Telecomunicaciones que únicamente restringe los despliegues aéreos o por fachadas para las edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada.

Para esta situación se aporta como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Parcent, que en su Resolución nº 20230912AR01 de 12 de Septiembre de 2023, en el que se indica que no se permiten las actuaciones de despliegue de fibra óptica por

fachadas que se encuentran dentro del Catálogo de de Protecciones de Parcent. Pero consultado el Inventario de Bienes de Interés Cultural declarados por la Generalitat Valenciana en el municipio de Parcent, únicamente aparece registrado un Bien del Tipo Yacimiento denominado El Seguili.Abric I; el cual no se ve afectado por el despliegue de la red de fibra óptica.

<https://mega.nz/file/ENhHRJRT#M38NR512t7R3E8B1UsQbQqTF--dmMUEePacEenEwxGM>

iii.d) Prohibición a efectuar despliegues en zonas donde ya existen otras redes de comunicaciones.

Determinadas administraciones han llegado a prohibir despliegues de redes de comunicaciones electrónicas en zonas donde ya existen otras redes, instando al operador solicitante a llegar a un acuerdo comercial con el operador que ya dispone de la red.

A modo de ejemplo podemos resaltar el caso del Ayuntamiento de Villagonzalo de Tormes, que en el Informe a una Solicitud de Autorización de Plan de Despliegue responde indicando que en las zonas de la localidad en que exista duplicidad de la red, se deberá llegar a un acuerdo comercial con la empresa ya existente.

<https://mega.nz/file/5ARmEbZD#v9iafiW8BzALN1MNBhLAnDjVvuPP-3ddfogOafaVvYL8>

(iv) Imposibilidad absoluta de instalar redes y equipos de comunicaciones electrónicas o exigencia de condiciones desproporcionadas

iv.a) Imposibilidad de efectuar despliegues en zonas con categoría de suelo rústico según los planeamientos urbanísticos.

Otro obstáculo que se ha identificado en la tramitación de licencias de redes de comunicaciones electrónicas es la denegación de autorizaciones por incluir zonas que tienen la categoría urbanística de suelo rústico en las que no se permiten obras de edificación. En este caso hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley General de Telecomunicaciones, sobre el carácter que tienen las redes públicas de comunicaciones electrónicas de equipamiento de

carácter básico y la consideración como obras de interés general. Pero, además, en estas zonas con categoría de suelo rústico, existen edificaciones y actividades legalmente asentadas como son las Explotaciones Agrarias y Ganaderas. Y es para estas instalaciones para las que están destinadas las redes proyectadas en estas zonas, dada la necesidad de conexiones de banda ancha de estas instalaciones para poder efectuar la adaptación a la Agricultura y Ganadería 4.0.

Para esta situación se aporta como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Alfajarín, que en su Resolución 20223-256 de 17 de Mayo de 2023 deniega la licencia de instalación de fibra óptica en base a que las zonas proyectadas se encuentran catalogadas como Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras en las que no se podrá realizar ninguna obra de edificación y asimismo la urbanización en la que se proyecta el despliegue de fibra óptica no es conforme con el Plan General de Ordenación Urbana.

https://mega.nz/file/JUJQmJrQ#_55qeSar_BVIFRuAFAvly84tAPDlvT4sxsg8YEH-vC8

iv.b) Exigencia desproporcionada de restitución de viales en la ejecución de obras civiles de infraestructuras de telecomunicaciones

En la tramitación de Obras Civiles de Infraestructuras de Telecomunicaciones resulta habitual que las administraciones establezcan unas exigencias de restitución de los firmes y viales donde se han ejecutado las obras desproporcionados. Así, para la ejecución de canalizaciones mediante la técnica de microzanja con una sección de 20 cm x 60 cm, hay administraciones que han exigido la adecuación de la plataforma y restitución del firme en todo el ancho de los caminos. Esto lleva a que los despliegues no sean viables económicamente. A modo de ejemplo se indica el caso del Ayuntamiento de Bullas que en el Expediente 4859/2023 correspondiente a la ejecución de canalizaciones para infraestructuras de telecomunicaciones a través de caminos, exige el asfaltado de todo el ancho del camino desde donde se ubica la zanja hasta el borde.

<https://mega.nz/file/1NgG1bTR#zqOoKwTY31wJE8lQyhsrlbK24Ltf-MTANqUgsHK8Bqc>

¿Existen otras restricciones al despliegue de redes de telecomunicaciones que considere no identificadas en el documento? (máximo 1000 palabras):

Aunque se recogen un amplio espectro de restricciones al despliegue, dos de los obstáculos que no se han incluido son los siguientes:

viii) Exigencia de Documentación no proporcionada para la tramitación de Despliegues de Redes de Comunicaciones Electrónicas

viii-a) Exigencia de determinado contenido del Plan de Despliegue no acorde a lo recogido en el artículo 49.9 de la Ley Gral. de Telecomunicaciones

Si nos remitimos a lo establecido en el artículo 49.9 de la Ley 11/2022, de 28 de Junio, de Telecomunicaciones, ahí se establece que los Planes de Despliegue son documentos de carácter descriptivo e informativo, no debiendo tener un grado de detalle de un proyecto técnico. Y en él el operador efectuará una mera previsión de los supuestos en los que se pueden efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos.

Ahora bien, muchas administraciones municipales ante la presentación de un plan de despliegue con el contenido establecido en el artículo 49.9 de la Ley General de Telecomunicaciones, exigen la subsanación del mismo requiriendo el mismo contenido de un proyecto técnico. Esto es contrario a lo establecido en la Ley y retrasa la tramitación de la instalación de las redes.

Para esta casuística debemos mencionar el caso el Ayuntamiento de las Veguillas (Salamanca) que ante la presentación de un Plan de Despliegue de Red de Comunicaciones Electrónicas basada en Fibra Óptica hasta el Hogar, emitió Informe en el que señala que la documentación del Plan de Despliegue presentado es muy general y asimismo requiere documentación concreta y detallada, tanto gráfica como escrita de las actuaciones a desarrollar.

https://mega.nz/file/cY5GiA5J#haHvqJiBj9koiJkVwJWmDn_bEOfeRVhn4ilzM6jKHp
U

viii-b) Exigencia de autorizaciones de terceros para la tramitación de licencias de instalación de redes de comunicaciones electrónicas.

Resulta bastante habitual que en la tramitación de las licencias de instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas las administraciones municipales se extralimiten solicitando documentación relativa a autorizaciones y permisos de terceros.

Así se ha producido la situación de administraciones municipales que, entre las autorizaciones de terceros solicitadas para tramitar la licencia de una red de comunicaciones electrónicas, han exigido las autorizaciones de cada uno de los propietarios de las viviendas por las que va a discurrir la red de comunicaciones. Esto resulta contrario por un lado a lo establecido en el artículo 55.5 de la Ley General de Telecomunicaciones, que faculta a los operadores a efectuar despliegues de tramos en paso y finales de redes a través de fincas sujetas al régimen de propiedad horizontal o no sin necesidad de contar con la autorización expresa del propietario. Y más aún, las administraciones municipales no ostentan el dominio sobre las fachadas y elementos pertenecientes a los inmuebles particulares para exigir autorizaciones sobre estos elementos, debiendo conceder las licencias condicionadas a salvaguardar el derecho de la propiedad privada y sin perjuicio de terceros.

Asimismo, también es habitual la exigencia por parte de las administraciones municipales de las Autorizaciones de otros Organismos o Administraciones con competencia en parte del dominio sobre el que discurrirán las redes (ríos, carreteras, ferrocarriles, etc.). Así, aunque la red de comunicaciones electrónicas esté planteada mayoritariamente a través del dominio público municipal y solo pequeña parte tenga afección con el dominio de otras administraciones (confederación, carreteras, ferrocarriles, etc.), las administraciones municipales deniegan la instalación completa de la red de comunicaciones en tanto no se cuente con todas las autorizaciones de terceros. Esto ocasiona un grave perjuicio,

que encadena los retrasos entre administraciones para la tramitación de las licencias de redes.

Como caso práctico de esta situación podemos destacar Informe Técnico del Ayuntamiento de Abarán ante Solicitud de Autorización de Plan de Despliegue de Red de Comunicaciones Electrónicas basada en Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH), que además de exigir la aportación de autorizaciones sectoriales de los titulares de los viales afectados requiere aportar las autorizaciones expresas de los particulares.

https://mega.nz/file/cZYEjYB#IWgrfsHSB5oNaFi_dSQ4fmH5vEY4-zhZ4OWeFf9Z06k

viii-c) Exigencia de documentación que obra en poder de la Administración

Adicionalmente, en la tramitación de licencias de despliegue de redes de comunicaciones electrónicas las administraciones municipales en ciertas ocasiones exigen documentación que ya se encuentra en poder de la propia administración. Cosa que es contraria a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Entre la documentación que han llegado a exigir las administraciones y que obra en su poder podemos destacar certificados de titularidad catastral de los inmuebles que se van a ver beneficiados de la cobertura de las redes o certificados de la inexistencia expediente sancionador por obras ilegales en los inmuebles ubicados en la zona donde se van a extender las redes. Esta documentación además de que ya se encuentra en posesión de las propias administraciones, es una documentación que por su contenido, no es fácilmente accesible a la vez que compleja de obtener.

ix) Paralización o Denegación de despliegues de redes sin contar con el preceptivo informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Resulta sistemático que cuando una administración municipal emite una Resolución paralizadora de un despliegue de una red de comunicaciones o una resolución de una denegación de un Plan de Despliegue obvie lo establecido en el artículo 50.5 de la Ley General de Telecomunicaciones. Este precepto obliga a la administración previamente a emitir la indicada resolución de paralización o denegación, a solicitar informe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

¿Qué posibles acciones no identificadas en el documento considera relevantes para minimizar los obstáculos detectados? (máximo 1.000 palabras).

Exponemos a continuación 3 acciones que consideramos que podrían reducir las barreras interpuestas por las Administraciones Públicas Municipales en la tramitación y autorización de Infraestructuras y Redes de Comunicaciones Electrónicas.

1.- ACCIONES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LEGISLACIÓN SECTORIAL TELECOMUNICACIONES

Dado que muchos de los obstáculos interpuestos por las administraciones en el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas tienen su causa en la falta de conocimiento de la legislación sectorial de telecomunicaciones por parte de los servicios técnicos municipales, quienes en su gran mayoría cuentan con formación académica en el área de la edificación o industrial pero no en la de telecomunicaciones. Una acción que minimizaría los obstáculos sería la difusión y formación de la legislación sectorial y de los casos tramitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entre los servicios técnicos municipales.

2.- ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES PARA APROBAR PLANES DE DESPLIEGUE DE ÁMBITO MUNICIPAL

Otra de las acciones que también redundaría en la reducción de las barreras interpuestas por las administraciones en la tramitación de la instalación de redes e infraestructuras de telecomunicaciones consistiría en una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones. La modificación a introducir sería sobre el artículo 49.9 en lo relativo a la presentación del Plan de Despliegue a la Administración Pública competente. Debiendo añadir expresamente en el precepto a la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, como Administración Pública competente para tramitar y aprobar Planes de Despliegue en base a las competencias que tiene establecidas según lo recogido en el artículo 11 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero:

e) La tramitación de los asuntos relacionados con los derechos de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a la ocupación del dominio público y de la propiedad privada y a su uso compartido, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y limitaciones a la propiedad.

k) Las relacionadas con la colaboración entre las Administraciones Públicas que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, previstas en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y en su normativa de desarrollo.

Esta modificación podría suponer a priori una injerencia de la Administración Estatal en las competencias de las Administraciones Municipales, quienes ostentan las competencias de Urbanismo según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

Pero esta posible invasión de competencias estatales sobre las municipales, quedaría en cualquier caso solventado, ya que en última instancia, tal y como ya se encuentra reflejado en el artículo 49.9, aun en el caso en que el Plan de Despliegue haya sido aprobado por la Administración Estatal el Operador no quedaría exento de la presentación de las Comunicaciones Previas y Declaraciones Responsables para los casos de instalaciones e infraestructuras en el dominio privado que ocupen más de 300 metros cuadrados o tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico y en espacios naturales protegidos y en el caso que se haga ocupación del dominio público de la tramitación de las correspondientes licencias y autorizaciones previas.

3.- DESARROLLO DE LA NORMATIVA Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GRAL. DE TELECOMUNICACIONES

La tercera medida que sería necesario adoptar con el fin de mitigar los conflictos y restricciones a los despliegues de redes de comunicaciones electrónicas en el ámbito municipal es la relativa al desarrollo de la normativa y reglamentos que se indican en la Ley General de Telecomunicaciones y que día de hoy no han sido publicados todavía.

En este sentido si nos remitimos al ya repetido artículo 49.9 de la Ley Gral. de Telecomunicaciones, en su párrafo sexto establece lo siguiente sobre el contenido de los Planes de Despliegue: “Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros”.

El que no esté publicado a día de hoy este Real Decreto, permite cierta discrecionalidad, e incluso arbitrariedad a las Administraciones Municipales a la hora de exigir información, documentación y datos que debe contener un Plan de Despliegue. Lo que a su vez origina, al exigir documentación no proporcionada, compleja y dependiente de terceros, la paralización y retraso en los despliegues de redes.

De manera paralela el artículo 49.5 de la Ley General de Telecomunicaciones hace referencia a unos parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional decimotercera de la Ley Gral. Pero si nos remitimos a esta disposición adicional observamos que estos parámetros se establecerán mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros:

Los parámetros y requerimientos técnicos esenciales que son indispensables para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas se establecerán mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

Nuevamente, el que no estén fijados estos parámetros y requerimientos técnicos esenciales, abre la puerta de la discrecionalidad a las administraciones municipales. Pudiendo establecer, por ejemplo, la prohibición de efectuar despliegues subterráneos con cable directamente enterrado, exigir determinadas secciones de canalizaciones o alturas máximas de torres de telecomunicaciones.